

Señor:

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI- REPARTO

Cali (Valle del Cauca)

DEMANDANTE: MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, MATIAS COBO ANGULO y SANTIAGO RODRÍGUEZ ANGULO
HENRY FERNANDO PEREA

DEMANDADO: ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO – PALMIRA (V).

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

GONZALO ALBERTO TORRES SALAZAR, mayor de edad, abogado titulado y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de la señora MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, quien a su vez obra en nombre y representación de los menores sobrinos MATIAS COBO ANGULO y SANTIAGO RODRÍGUEZ ANGULO, hijos de la occisa MARÍA ALEJANDRDA ANGULO PEREA (QEPD) conforme al poder que me ha sido conferido, respetuosamente presento DEMANDA EN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, convocando a la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO del MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle); entidad hospitalaria representada por la gerente, Dra. EMILCE ARÉVALO GARCÍA o quien haga sus veces, a lo cual procedo en los siguientes términos:

Encontrándonos dentro del término legal establecido solicitamos a su despacho fallo favorable con reconocimiento de la indemnización de perjuicios morales y materiales en medio de control de reparación directa, a de acuerdo a lo previsto en artículo 140 de la ley 1437 de 2011 (y demás concordantes), y que se derivan de la falla en el servicio de atención médica, diagnóstico equivocado y tratamiento ineficaz que derivó en la muerte de su hermana y madre: MARÍA ALEJANDRDA ANGULO PEREA (QEPD).

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS O REPRESENTANTES:

DEMANDANTES: MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, MATIAS COBO ANGULO y SANTIAGO RODRÍGUEZ ANGULO
HENRY FERNANDO PEREA

PARTE DEMANDADA: ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO del MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle); entidad hospitalaria representada por la gerente, Dra. EMILCE ARÉVALO GARCÍA o quien haga sus veces.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se declare la falla en la prestación del servicio médico hospitalario, por mala atención médica, diagnóstico equivocado y tratamiento ineficaz por parte de la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO del MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle), que degeneró en la temprana muerte de su hermana y madre MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA (QEPD), el 28 de mayo de 2020.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se profiera sentencia en donde se repare el daño antijurídico provocado por las omisiones y errores cometidos en la atención, diagnóstico y tratamiento dado a la señora MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREA (qepd), cuando ingresó por el servicio de URGENCIAS de dicha entidad hospitalaria el 20 de mayo de 2020.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la entidad demandada, a reconocer y pagar a los convocantes y demandantes, o a quien represente sus derechos, los perjuicios morales y materiales a que tienen derecho por haberse visto obligados a soportar dicho daño antijurídico.

CUARTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha del deceso de MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREA (QEPD) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

QUINTA: La ESE HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A.

SEXTA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el Código General del Proceso.

Esta solicitud de Conciliación para agotar el requisito de procedibilidad la fundamentamos en los siguientes;

HECHOS:

PRIMERO: Mi representada MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, es hermana de la difunta MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA, siendo ambas hijas de los señores ENAR ANGULO URRESTY y MARÍA VIRGINIA PEREA, tal y como consta en los respectivos registros civiles de nacimiento. Mi representado HENRY FERNANDO PEREA, es hermano por parte de madre, de la difunta MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA, tal como consta en el respectivo registro civil de nacimiento.

SEGUNDO: Mis representados, MATIAS COBO ANGULO y SANTIAGO RODRÍGUEZ ANGULO, son hijos menores supérstites de MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA, cuya custodia le fue entregada a su hermana MARTHA ISABEL, quien obra en su nombre y representación.

TERCERO: Tal y como consta en la historia clínica expedida por la ESE HOSPITAL RAUN OREJUELA BUENO, el día 20 de mayo de 2020 a las 6:22 pm, la señora MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREA, ingresó por el servicio de urgencia, totalmente consciente, manifestando que tenía temblor, estaba cansada y tenía ahogo, informando que le dolía una pierna que tenía inflamada.

CUARTO: La historia clínica da cuenta de los siguientes antecedentes patológicos al momento de su ingreso por el servicio de urgencias: "...LES + Escleroderma variedad sistémica desde 2013 (compromiso pulmonar – EPID-, hematológico, serosis, vasculitis en SNC y cutáneo) hipertensión pulmonar secundaria, anémico crónico, insuficiencia respiratoria crónica y secuelas de TB pulmonar (TTO 2019)".

QUINTO: Luego de ser valorada en dicho servicio de urgencias y como se observa en la historia clínica, le ordenaron una impresión diagnóstica - un electrocardiograma-, y unos medicamentos (Furosemda 40 mgs y Propanolol 40 mgs) egresando a las 6:47 pm de ese mismo día sin remisiones, indicándole que podía seguir el tratamiento que ya le habían prescrito en casa, porque tenía el ácido úrico alto.

SEXTO: El 28 de mayo ingresa nuevamente por el servicio de urgencias de la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, pues su estado se agravó, le aquejaba un dolor intenso en el pecho y la llevaron sus familiares pues se desmayó en su casa, la atendió el médico familiar (no urgenciólogo) NESTOR LEONARDO PORTILLA QUIROGA, le ordenó unos exámenes de laboratorio, placa de tórax y **le informaron a su familia que podía ser COVID 19, sin que en los exámenes diagnósticos así se viera reflejado pues no hubo prueba PCR** para comprobarlo, pasando por alto e ignorando las advertencias de sus familiares sobre sus preexistencias, enfermedad pulmonar crónica con neumonías repetitivas y tuberculosis.

- SÉPTIMO:** Con ese diagnóstico, errado, la aislaron inmediatamente, informándole a sus familiares que le iban a realizar otros exámenes diagnósticos para ingresarla a la UCI debido al estado de gravedad en el que se encontraba MARIA ALEJANDRA, obviando como ya manifesté las advertencias de sus familiares sobre sus antecedentes clínicos y preexistencias y lo que la misma historia clínica evidencia desde 2019 como patologías de base: "...NF mixta de tejido conectivo (LES y Esclerosis sistémica progresiva, Enf. Pulmonar intersticial difusa, Ht. Pulmonar grupo 1 y 3 de Niza, **diagnosticado en febrero de 2013**, en diciembre /14 reactivación con poliserositis, neumonitis, vasculitis cerebral con convulsión generalizada...".
- OCTAVO:** Ese mismo 28 de mayo a las 11:40 falleció, según consta en el certificado de defunción No. 09803687.
- NOVENO:** Por la entrega de la custodia de sus menores hijos a su hermana, esta debe correr con los gastos de manutención, soporte educativo y salud de cada uno de ellos, con sus ingresos como trabajadora del sector salud.
- DÉCIMO:** En cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 161 del C.P.A.C.A., se cita a conciliación prejudicial a la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO.

FUNDAMENTOS Y OPORTUNIDAD:

Dispone el artículo 140 del C. P. A. C. A.

"Reparación Directa:

Art. 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma..."

Se pretende con esta demanda, que se declare la falla en la prestación del servicio médico hospitalario, por mala atención médica, diagnóstico equivocado y tratamiento ineficaz por parte de la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO del MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle), que degeneró en la temprana muerte de su hermana y madre MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA (QEPD), el 28 de mayo de 2020 y que como consecuencia de la anterior declaración, se profiera sentencia en donde se repare el daño antijurídico provocado por las omisiones y errores cometidos en la atención, diagnóstico y tratamiento dado a la señora MARIA ALEJANDRA ANGULO PEREA (qepd), cuando ingresó por el servicio de URGENCIAS de dicha entidad hospitalaria el 20 de mayo de 2020, condenando a la entidad demandada, a reconocer y pagar a los convocantes y demandantes, o a quien represente sus derechos, los perjuicios morales y materiales a que tienen derecho por haberse visto obligados a soportar dicho daño antijurídico.

De otra parte, respecto a la caducidad, establece el artículo 164 del C.P.A.C.A., que la demanda deberá presentarse:

"...2. En los siguientes términos so pena que opere la caducidad:

...i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. ...".

El fallecimiento de MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA (QEPD) ocurrido como consecuencia de falla en la prestación del servicio médico hospitalario, por mala atención médica, diagnóstico equivocado y tratamiento ineficaz por parte de la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO del MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle), como ya se manifestó en los hechos en los que se fundamenta esta solicitud, ocurrió el 28 de mayo de 2020, por ende, el término de caducidad vence a partir del día siguiente, esto es el 29 de mayo de 2022 y nos encontramos en término para demandar, **teniendo en cuenta la interrupción del término con la oportuna radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, cuya audiencia se llevó a cabo en el Despacho de la Procuradora 60 Judicial I Asuntos Administrativos el 24 de agosto de 2022, declarándose fallida por inasistencia de apoderados o representantes de la entidad demandada.**

EL MEDIO DE CONTROL A PRECAVER:

Con fundamento en el artículo 138 de la Ley 1437 del año 2011, nos encontramos dentro del término de ley para instaurar el medio de control de Reparación Directa y agotar el requisito de procedibilidad pertinente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LOS CONVOCANTES:

Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia:

“...El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...”.

Artículo 164 del C.P.A.C.A., que la demanda deberá presentarse:

“...2. En los siguientes términos so pena que opere la caducidad:

...i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia...”.

La falla médica involucra, de una parte, el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, y de otra, todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades estas últimas que están a cargo del personal paramédico o administrativo.

Todas estas actuaciones integran el “acto médico complejo”, que la doctrina, acogida por la Jurisprudencia del Consejo de Estado y que ya hace doctrina al respecto, se clasifica en: (i) actos puramente médicos; (ii) actos paramédicos, que corresponden a las acciones preparatorias del acto médico, que por lo general son llevadas a cabo por personal auxiliar, en la cual se incluyen las obligaciones de seguridad, y (iii) los actos extra médicos, que corresponden a los servicios de alojamiento y manutención del paciente, clasificación que tuvo relevancia en épocas pasadas para efectos de establecer frente a los casos concretos el régimen de responsabilidad aplicable y las cargas probatorias de las partes.

Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio médico lo constituye el diagnóstico, porque a partir del mismo se define el tratamiento posterior.

Las fallas en el diagnóstico de las enfermedades y el consecuente error en el tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida interpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la omisión de la práctica de los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto. Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los síntomas pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del servicio cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente.

En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados de un error de valoración, deberá estar demostrado que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque se omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo aquejaban; no sometió al enfermo a una valoración física completa y sería omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico; dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, incurrió en un error inexcusable para un profesional de su especialidad.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el error de valoración de la paciente en cada una de las veces que ingresó por urgencias, especialmente la última el 28 de mayo de 2020, constituyó un factor determinante para las complicaciones que se presentaron y terminaron en su deceso por un mal diagnóstico, error en el tratamiento y omisión en el deber de atender sus patologías previas y comorbilidades, teniendo prueba de su existencia en la historia clínica, confundiendo con COVID 2019, sin que hubiera prueba PCR que así lo determinara, debido a que una evaluación clínica realizada oportunamente con base en la *lex artis* y en las reglas de la experiencia, acompañada de una intervención adecuada, hubieran evitado o al menos mitigado las consecuencias indeseadas, se debe imputar la producción del daño a la entidad demandada, debido a que el servicio médico se brindó a la hermana y madre de los demandantes sin atender las circunstancias que rodeaban su caso y la urgencia que denotaba su condición crónica de enfermedad pulmonar crónica y tuberculosis.

Es reiterada la jurisprudencia¹ sobre esta clase de responsabilidad:

“...La Sección Tercera del Consejo de Estado ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva, advirtiendo que es la falla probada del servicio el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria, de suerte que se exige acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y éste. En materia médica, para que pueda predicarse la existencia de una falla, la Sala ha precisado que es necesario que se demuestre que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso. Del mismo modo, deberá probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al alcance. NOTA DE RELATORIA: Consultar sentencias de: 31 de agosto de 2006, exp. 15772; octubre 3 de 2007, exp. 16402; 23 de abril de 2008, exp. 15750; 1 de octubre de 2008, exps. 16843 y 16933; 15 de octubre de 2008, exp. 16270; 28 de enero de 2009, exp. 16700; 19 de febrero de 2009, exp. 16080; 18 de febrero de 2010, exp. 20536; 9 de junio de 2010, exp. 18683; 25 de febrero de 2009, exp. 17149 y de 11 de febrero de 2009, exp. 14726...”

PRUEBAS

Solicito a su Entidad tener como pruebas las siguientes:

A-). DOCUMENTALES QUE APORTO:

1. Copia de las Cédulas de Ciudadanía y tarjetas de identidad de mis poderdantes.
2. Copia de los registros civiles de nacimiento de los hermanos de MARÍA ALEJANDRA ANGULO PEREA (QEPD) MARTHA ISABEL ANGULO PEREA y HENRY FERNANDO PEREA.
3. Copia de los registros civiles de nacimiento de sus hijos menores de edad: MATÍAS COBO ANGULO y SANTIAGO RODRÍGUEZ ANGULO.
4. Certificado de Defunción No. 09803687 del 28 de mayo de 2020.
5. Historia Clínica emitida por la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO.

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH Bogotá, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 50001-23-31-000-2002-00375-01(30102).

6. Certificado de custodia de menores entregada a MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
7. Acta de audiencia de conciliación prejudicial fallida del 24 de agosto de 2022.
8. Poder para actuar.

B -). TESTIMONIALES:

Solicitamos se admita tomar el testimonio de:

MARTHA ISABEL ANGULO PEREA, C.C. 1.113618.965, demandante y hermana de la occisa para que cuente lo que le consta sobre los hechos y las consecuencias de los mismos en su vida y la de su familia, especialmente sus sobrinos por la temprana pérdida de su madre, pues sin duda alguna el hogar se vio privado de la ayuda en términos monetarios que la víctima les brindaba para su sostenimiento y cuidado.

C-). JURISPRUDENCIALES:

En atención a lo establecido en el Artículo 102 de la Ley 1437 de 2.011, amablemente solicito al señor Juez tener en cuenta los Precedentes Judiciales que fueron invocados en el acápite de violación de la norma, los cuales de manera fehaciente ratifican los fundamentos jurídicos aquí expresados y subsecuentemente la legalidad de las pretensiones solicitadas.

C-). DE OFICIO:

Amablemente solicito al Honorable Juez decretar las siguientes las que considere pertinentes.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

Ante la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, como regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno-filiales (primer grado de consanguinidad) con la víctima que ha perdido la vida.

De otra parte, por LUCRO CESANTE, en aplicación de la presunción de sostenimiento económico de sus hijos y para el apoyo en el hogar paterno y materno. Se solicitará, reconocimiento a favor de hermana de la víctima quien recibió de Bienestar Familiar la custodia de los hijos menores de MARÍA ALEJANDARA ANGULO PEREA (QEPD). Esto es, los gastos en los que incurre y seguirá incurriendo hasta que ellos alcancen la mayoría de edad, mediante la aplicación de la fórmula actuarial como lo ha establecido el Consejo de Estado en sentencia de unificación, y como quedará demostrado en el proceso.

En cuanto a la base de liquidación de ese lucro cesante, será el salario mínimo legal mensual vigente en el año 2020, fecha en que ocurrieron los hechos.

Veamos:

$$V = V_h * \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

índice inicial

$$V_a = \$908.526 * 120,27$$

$$35,62 V_a = \$306.933$$

Como el salario mínimo actual es superior, se tomará este último, incrementado en un 25% para reconocer las sumas que a título de prestaciones sociales se presume devengaría una persona con ese nivel de ingreso.

Así:

$$\text{SMLMV} = \$908.526 * 1.25 = \$1.135.657$$

La indemnización entre la época del daño y la fecha de la sentencia, corresponderá al lucro cesante consolidado. La fórmula actuarial aceptada por la Corporación para liquidar el lucro cesante consolidado es la siguiente:

$$S = \frac{Ra(1+i)^n - 1}{i}$$

En la que:

Ra= Base de la liquidación actualizada
 I= Interés anual expresado en tasa mensual
 n = Período a indemnizar
 1= Constante

El lucro cesante futuro, corresponderá al período a indemnizar el tiempo transcurrido entre la fecha del fallo y la época en que cumplirían la mayoría de edad los menores hijos de la occisa, víctima de la falla en el servicio, conforme a las fórmulas reconocidas por el Consejo de Estado:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Conforme a lo establecido en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, la cuantía la estimo en CUATROSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$440.000.000) por perjuicios morales a la razón de 100 salarios mínimos legales por cada uno de los demandantes, más lo que resulte de la aplicación del cálculo actuarial del lucro cesante consolidado y futuro al momento del fallo ejecutoriado que acceda a las pretensiones.

COMPETENCIA:

Con fundamento en el numeral 3º del artículo 156 de la Ley 1437 del año 2011, resultan competentes los Juzgados Administrativos de Cali atendiendo que el lugar de ocurrencia de los hechos, objeto del presente asunto fue el Municipio de Palmira y el requisito de procedibilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del DUR 1069 de 2015, se deberá agotar ante la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, siendo competente juez administrativo del circuito de Cali.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.4.3.1.1.6, romanilla i) del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 declaramos bajo la gravedad de juramento no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los hechos aquí expuestos.

ANEXOS:

Me permito anexar los documentos relacionados en el acápite de **PRUEBAS** de esta petición (xx folios anexados en total).

NOTIFICACIONES:


CONVOCANTE: en su domicilio ubicado en la carrera 39 A No.9-A-12 en Palmira – Valle y en su Correo Electrónico: henry03803@gmail.com

-CONVOCADO: ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, Calle 36 No. 39 – 75, en Palmira (Valle)

Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@gmail.hrob.gov.co
notificacionesjudicialeshrob@gmail.com

- Al suscrito apoderado las recibirá personalmente en la Secretaría de su despacho, o en mi oficina de Abogado ubicada en el domicilio: Avda. 3 Norte No. 8 N-24 Oficina 318, Edificio Centenario I, y/o de conformidad con lo preceptuado en los Artículos 54, 56, 201, 203 y 205 de la Ley 1437 de 2.011, se me puede Notificar por medio electrónico al siguiente Correo Electrónico: torresabogados2013@hotmail.com

Respetuosamente,



GONZALO ALBERTO TORRES SALAZAR
C.C. No 79.629.201 de Bogotá.
T.P. N° 219.065 del C.S.J.

Copia.

Archivo.
ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO
EMILCE AREVALO GARCÍA – Gerente
Calle 36 No. 39 – 75, en Palmira (Valle)
notificacionesjudiciales@gmail.hrob.gov.co
notificacionesjudicialeshrob@gmail.com